

DESACATO DE TUTELA



Manizales 20 de Marzo del 2020

Juzgado Quinto Civil Municipal Mzls

Estado social de Derecho. E.S.D

URGENT

REF: ACCION DE TUTELA No: 1700140030052019-0050700/Sentencia No: 186

ACCIONANTE: BERNARDO GARCÍA YATE

CONTRA: ASMETSALUD E.P.S

INCIDENTE PARA ESTABLECER SANCION

20 MAR 2020

Copia

BERNARDO GARCÍA YATE CON C.C: 75079820, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre propio, acudo a su despacho a presentar incidente para establecer sanción dentro de las diligencias de la referencia.

PRETENSIONES INICIALES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA TUTELA HASTA LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE ESTE INCIDENTE

Por el solo hecho de que la EPS ASMETSALUD ha demorado como ya es costumbre la entrega del medicamento y no darlo en el momento de reclamarlo y no tener abastecido de tal medicamento en sus estantes y dilatar el tiempo y valerse dolosamente con la finalidad de NO entregarlo, en su cumplimiento y por este solo hecho, y en atención a lo dispuesto en el artículo 52 y 53 del decreto 2591/91 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la sentencia T-459 de junio de 2003 solicito:

1. Ordenar el arresto por una (1) semana del representante legal de la EPS ASMETSALUD
2. Multar con 10 salarios mínimos a la EPS ASMETSALUD
3. Compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la posible comisión del delito de FRAUDE A RESOLUCION JUDICIAL o la que hubiere lugar, por parte del señor DIRECTOR NACIONAL DE LA EPS ASMETSALUD
4. Condenar en costas y perjuicios a la EPS ASMETSALUD

PRETENSIONES SI EVENTUALMENTE DENTRO DEL TRAMITE DE ESTE DESACATO LA ENTIDAD DEMANDADA CUMPLE EL FALLO

Si luego de presentado el incidente y debido a la presión del instrumento jurídico la EPS ASMETSALUD responde (es decir, un mes y con la notificación del trámite del desacato) y en

atención a lo dispuesto en el artículo 52 y 53 del decreto 2591/91 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la sentencia T-459 de junio de 2003 solicito:

1. Ordenar el arresto por dos (2) semanas del representante legal de la EPS ASMETSALUD
2. Multar con 15 salarios mínimos a la EPS ASMETSALUD
3. Compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la posible comisión del delito de FRAUDE A RESOLUCION JUDICIAL o la que hubiere lugar, por parte del señor DIRECTOR NACIONAL DE LA EPS ASMETSALUD
4. Condenar en costas y perjuicios a la EPS ASMETSALUD

PRETENSIONES SI LUEGO DE LLEVADO A CABO EL TRAMITE DEL DESACATO, LA ENTIDAD DEMANDADA TODAVIA NO HA CUMPLIDO EL FALLO DE TUTELA

Si luego de presentado el incidente y ni siquiera con la presión de estar en trámite del mismo, la EPS ASMETSALUD no cumple y se llega a la etapa procesal de fallar el incidente y en atención a lo dispuesto en el artículo 52 y 53 del decreto 2591/91 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la sentencia T-459 de junio de 2003 solicito:

1. Ordenar el arresto por tres (3) semanas del representante legal de la EPS ASMETSALUD
2. Multar con 20 salarios mínimos a la EPS ASMETSALUD
3. Compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la posible comisión del delito de FRAUDE A RESOLUCION JUDICIAL o la que hubiere lugar, por parte del DIRECTOR NACIONAL DE LA EPS ASMETSALUD
5. Condenar en costas y perjuicios a la EPS ASMETSALUD

HECHOS

ASMETSALUD E.P.S concomitante TERRITORIAL DE SALUD, ya es costumbre que estén jugando literalmente con mi medicación a través de dilaciones procesales, pues ahora ASMETSALUD E.P.S cambio de dispensador o droguería o farmacia; el 11 de marzo tenía que recibir el BUPROPION DE 300MG, pero debido al cambio ya mencionado el nuevo dispensador disque no acepta viejas transcripciones ya que la mía es del 2019, ya van 10 días y no me han resuelto nada la E.P.S, llamo a una funcionaria de la E.P.S por WhatsApp y por celular y se niega a contestar y resolver el problema, reflejo este del cómo opera esta E.P.S CONTRA MI en cuanto a este sobre este galimatías, como siempre soy YO quien paga los platos rotos. Solo lo que hacen es jugar con la salud mental de quien presenta este desacato, me están negando con dolo la medicación, se halla un concierto para delinquir por parte de los funcionarios de la E.P.S, exijo el cumplimiento del suministración

del medicamento además como lo expongo en este desacato la cárcel e imposición de multa a estas disque instituciones e institucionandos. ES INAUDITO QUE LOS FUNCIONARIOS SIGAN JUGANDO A LOS DIOSSES DECIDIENDO QUIEN VIVE Y QUIEN MUERE y no haya alguien quien les ponga un pare. Señor(a) juez (a) que no sea letra muerta este ergotismo literal de leyes que están bien sustentadas en la carta constitucional. Y que en menos de 48 horas y NO MAS tiempo cumplan estos delincuentes uxoricidas con el derecho constitucional fundamental a la vida en conexidad con la salud e integridad personal y Seguridad Social. En el momento de entregar este desacato y demore el trámite y la gestión será una entrega, pido a la jueza que remita este desacato a la procuraduría para que sean investigados y sancionados de acuerdo al código único disciplinario, es costumbre la demora de mis medicamientos, parece ser algo personal y las acciones lo retribuirán.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

La Corte Constitucional mediante la sentencia T-459 de 2003 se pronunció con relación al incumplimiento tardío de una sentencia de tutela, en los siguientes términos.

"Teniendo en cuenta que este incidente tiene como objeto no sólo lograr la efectiva materialización de los derechos fundamentales afectados, sino el de verificar si la persona o autoridad a la cual se le dio la orden de tutela la ha incumplido y establecer si es del caso imponer o no la sanción respectiva, la necesaria consecuencia del incumplimiento y demostrada la responsabilidad del sujeto es la imposición de la sanción. Así las cosas, si durante el trámite del incidente y antes de que se decida en forma definitiva, el obligado cumple con lo ordenado por el juez constitucional, no por ello se excluye la posibilidad de aplicar la sanción por desacato.

El desacato por parte de la E.P.S. ha conllevado gravísimas consecuencias para mi calidad de vida. Tales acciones realizadas por la E.P.S. conllevan a Artículo 28 (código penal). Concurso de personas en la conducta punible. Concurrer en la realización de la conducta punible los autores y los partícipes. Artículo 22. Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. Se haya por parte de estas instituciones un agar de actos delictivos como Artículo 413 (código penal). PREVARICATO POR ACCION, Artículo 416. Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.

DERECHO

- Se sustenta este incidente para establecer sanción en lo dispuesto en el artículo 52 y 53 del decreto 2591/91.
- La remisión al procedimiento civil se encuentra en el artículo 4 del decreto 306/92.
- Los incidentes se encuentran reglados en los artículos 61, 135, 137, 139.

PRUEBAS

(1) ➤ **Fotocopia de la sentencia de acción de tutela.**
 (2) ➤ **Historia clínica.**
 (3) ➤ **Transcripción medica del BUPROPION 300 MG.**

CARRERA 14 #28-26 San José (orig. 1970-1971, zona de reserva, zona de reserva de patrimonio)

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL


Bernardo García Vate
C.C: 75079820 de Manizales
Carrera 14 # 28 - 26 San José
3008183981/vategarcia775@yahoo.es

DERECHO



La salud
es de todos

Minsa

FÓRMULA MÉDICA

Fecha y Hora de Expedición (AAAA-MM-DD)

2018-12-02 14:59:06

Nro. Prescripción:

20191202154015978052

DATOS DEL PRESTADOR

Departamento: CALDAS	Municipio: MANIZALES	Código Habilitación: 170010194901
Documento de Identificación: 800413177	Nombre Prestador de Servicios de Salud: FUNDACION FUNPAZ	
Dirección: VIA CUCHILLA DEL SALADO	Teléfono: 8714431	

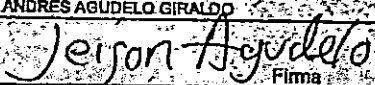
DATOS DEL PACIENTE

Documento de Identificación: CC75079820	Primer Apellido: GARCIA	Segundo Apellido: YATE	Primer Nombre: BERNARDO	Segundo Nombre:
Número Historia Clínica: 75079820	Diagnóstico Principal: F32.2 EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICOTICOS		Usuario Régimen: SUBSIDIADO	Ámbito atención: AMBULATORIO - NO PRIORIZADO

MEDICAMENTOS

Tipo prestación	Nombre Medicamento / Forma Farmacéutica	Dosis	Vía Administración	Frecuencia Administración	Indicaciones Especiales	Duración Tratamiento	Recomendaciones	Cantidades Farmacéuticas Nro / Letras / Unidad Farmacéutica
SUCESIVA	[BUPROPION CLORHIDRATO] 300MG/1U / TABLETAS DE LIBERACION MODIFICADA	1 DOSIS	ORAL	1 DIA(S)	SIN INDICACIÓN ESPECIAL	6 MES(ES)	SIN INDICACIONES ESPECIALES	180 / CIENTO OCHENTA / TABLETA


PROFESIONAL TRATANTE

Documento de Identificación: CC1053811081	Nombre: JEISON ANDRES AGUDELO GIRALDO
Registro Profesional: 1053811051	 Firma
Especialidad:	CodVer: BDE3-5E0F-110C-92E5-8870-F879-2897-AE22


La vigencia de la prescripción es la establecida en la Resolución 1885 de 2018 Art. 13. Numeral 5.

**FORMATO EVOLUCIÓN
DE PACIENTES**


CÓDIGO	FP-SP-PL-001
VERSIÓN	1.0
FECHA	FEB 2020

NOMBRE PACIENTE: BERNARDO GARCIA YATE				DOCUMENTO IDENTIDAD: CC 75079820	EPS: ASMET SALUD	EDAD: 44 AÑOS
HORA	D	M		EVOLUCIÓN		
13:15	07	02	2020	MOTIVO DE CONSULTA: VALORACIÓN POR PSIQUIATRIA ENFERMEDAD ACTUAL: PCTE EN TTO PREVIO POR PSIQUAITRIA PARA T-DEPRESIVO A BASE DE LEVOMEPROMAZINA 40G NOCHE + CLONAZEPAM 10G NOCHE + BUPROPION 300MG + METILFENIDATO 20MG, REPORTA BUEN PATRON DE SUEÑO Y ALIMENTARIO.		
				FAMILIARES: VIVE CON SUS PADRES. ANTECEDENTES PATOLOGICOS: NO MEDICOS: SOBREPESO PSIQUIATRIA: NIEGA QUIRURGICOS: NIEGA TOXICOS: NO ALERGICOS: NO		
				EXAMEN MENTAL DIRECTO: ASISTE SOLO, NORMOACTIVO, COLABORADOR, ALERTA, ATENCIÓN EUPROSEXICA, MEMORIA CONSERVADA, ORIENTACION GLOBAL, PENSAMIENTO RELEVANTE, COHERENTE, LÓGICO, NO ACTIVIDAD DELIRANTE; NO EXHIBE CONTENIDOS DEPRESIVOS, EXHIBE AFECTO RESONANTE, MODULADO. SENSORPERCEPCIÓN CONSERVADA. LENGUAJE FORMAL, FLUENTE Y PROSODICO. INTELIGENCIA IMPRESIONA PROMEDIO.		
				DIAGNOSTICO: F332 - TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO DEPRESIVO GRAVE PRESENTE SIN SINTOMAS PSICOTICOS PLAN BUPROPION 300MG: 1 X DIA LEVOMEPROMAZINA GOTAS: 40 GOTAS NOCHE CONAZEPAM GOTAS: 10G NOCHE E IR DISMINUYENDO GRADUALMENTE CITA EN 6 MESES  MARCO ANTONIO ACOSTA LOPEZ: PSIQUIATRA CC10539184. TP-270		

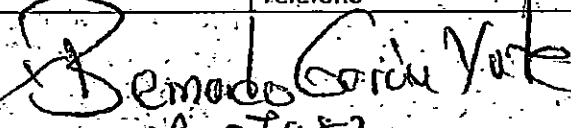
17317

 FunPaz I.P.S. Clínica de Salud Mental		FUNPAZ IPS CLINICA DE SALUD MENTAL NIT 900.413.177-2 KM 4 Vía Cuchilla del Salado 8714431 FORMATO UNICO DE FORMULACION MEDICA				CÓDIGO 023	FP-INT-FO- 023
						VERSIÓN 2.0	
						FECHA FEB 2020	
NOMBRE: BERNARDO GARCIA YATE						DOCUMENTO: 75079820	
EPS: ASMET		EDAD: 44		MANIZALES 07/02/2020			
CIE 10: F332		FORMULA PARA 6 MESES					
	Medicamento	Presentación	Dosis	Horario	Vía	Cantidad	
1	LEVOMEPRIMAZINA GOTAS	GOTAS	40G NOCHE	PM	VO	16 FCOS	
2	CLONAZEPAM 2.5MG/ML	GOTAS	10 G NOCHE	PM	VO	4FCOS	
3	BUPROPION X 300MG	CAP	1 X DÍA	AM	VO	180	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Firma y sello médico o psiquiatra  MARCO ANTONIO ACOSTA LOPEZ, PSIQUIATRA CC10539184. TP 270						Recibido	
						Documento	
						Teléfono	

7-feb. 2020

 **FunPaz I.P.S.**
 Clínica de Salud Mental

ENTREGADO - CANTIDAD 1 Clona - 4 Lev


 cc 75079820
 Cel. 3008183981

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES
Tres (03) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)

SENTENCIA No:	186
PROCESO:	ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE:	BERNARDO GARCÍA YATE
ACCIONADA:	EPS ASMETSALUD S.A.S Y DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
RADICADO:	1700140030052019-00507-00

1. OBJETO DE DECISIÓN

Procede el Despacho a resolver la acción de tutela presentada por el señor **BERNARDO GARCÍA YATE** identificado con cédula de ciudadanía No. 75.079.820, en contra de la **EPS ASMETSALUD S.A.S** y de la **DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS**.

2. ANTECEDENTES

2.1. ESCRITO DE TUTELA

El señor **BERNARDO GARCÍA YATE**, promovió acción de tutela en contra de la **EPS SASMETSALUD S.A.S**, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la dignidad humana, a la salud y a la seguridad social, toda vez que a la fecha no se le ha autorizado la entrega del medicamento denominado **"BUPROPION TABLETA DE 300 MG"**.

Para fundamentar la presente acción constitucional, relató los siguientes hechos relevantes:

- Indicó que presenta como diagnóstico **"trastorno afectivo bipolar"** y que para contrarrestar su patología su galena le ordenó el medicamento **"BUPROPION DE 300 MG"**, pero que no ha sido posible su autorización.
- Así mismo refirió que es desplazado por la violencia, teniendo situaciones psiquiátricas y psicológicas, siendo incapaz de asumir el costo económico del tratamiento y del medicamento.

2.2. PRETENSIONES

Del estudio integral del presente trámite constitucional, se observa que lo pretendido por la parte actora es que se ordene a la accionada (i) la autorización de medicamento requerido, (ii) que sea exonerado de toda clase de copagos, (iii) el tratamiento integral subsiguiente para contrarrestar su patología y (iv) que se le den los viáticos cuando sea remitido a otra ciudad para su tratamiento.

2.3. ADMISIÓN Y NOTIFICACIONES.

Mediante auto No. 1753 del 23 de agosto de 2019, se admitió la acción de tutela, se ordenó la notificación a las partes y se decretaron las pruebas que se consideraron necesarias para resolver el asunto (Fis. 10 y 11).

2.4. INTERVENCIONES

BERNARDO GARCÍA YATE

Atendiendo a la prueba decretada de oficio, allegó escrito indicado lo siguiente:

- Que actualmente no está laborando razón por la cual no devenga ningún salario, dependiendo económicamente de sus padres.
- Que su núcleo familiar está conformado por sus padres.
- Que no tiene personas a su cargo.
- Que reside en una vivienda arrendada, cancelando como canon de arrendamiento la suma de \$400.000 más servicios.
- En cuanto a la cancelación de copagos, indicó que es la primera vez que fue medicamento con "BUPROPION de 300 MG"; sin embargo, indicó que investigó el costo del mismo y asciende a la suma de \$20.000 mensuales.
- Que no posee bienes.

IPS CLÍNICA ROQUE ARMANDO LÓPEZ ÁLVAREZ EU

A través de su representante legal allegó escrito indicando en síntesis que si bien es cierto la IPS si tiene habilitado el servicio de **UROLOGÍA** se segundo nivel, también lo es que no existe contrato vigente para la prestación de servicios de salud con la **EPS SALUDVIDA** (Fl. 24).

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS

Allegó escrito indicando, en síntesis que toda la atención en salud requerida por el accionante se encuentra incluida en el POS y que por lo

tanto debe ser asumida por su EPS. Que bajo el principio de integralidad son las aseguradoras las encargadas de garantizar el acceso de los usuarios a todos y cada uno de los servicios de salud y todo lo que de sus patologías se derive. De ahí que haya solicitado desestimar las pretensiones del actor y su desvinculación del presente trámite constitucional (Fls. 20 y 21)

2.5. PRUEBAS RELEVANTES QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE.

- (Fl. 8) Copia de la cédula de ciudadanía del accionante.
- (Fl. 8 vto) Copia de la fórmula médica.
- (Fl. 9) Copia de la historia clínica del accionante.

3. CONSIDERACIONES

3.1. COMPETENCIA

Este Despacho tiene competencia para tramitar y decidir el proceso incoado, en virtud de lo dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591/91, en el cual se asigna la competencia; a prevención, a los Jueces de la República del lugar de ocurrencia de la vulneración del derecho.

La parte actora se encuentra legitimada en la causa para instaurar la acción de amparo, al tenor de lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.

Por último, el escrito que le dio origen al presente proceso cumple con las exigencias formales contenidas en el artículo 14 e inciso 2º del art. 37 del Decreto 2591 de 1991.

3.2. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

La acción de tutela es un instrumento jurídico confiado por la Constitución a los jueces, cuya justificación y propósito consisten en brindar a la persona la posibilidad de acudir sin mayores requerimientos de índole formal ante la justicia, con la certeza de que obtendrá oportuna resolución a la protección directa e inmediata que reclama del Estado, con el fin de que en su caso, y consideradas las circunstancias específicas, a falta de otros medios, se haga justicia frente a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de sus derechos fundamentales, logrando así que se cumpla con uno de los fines esenciales del Estado, consistente en garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

3.3. PROBLEMA JURÍDICO

Una vez verificada la procedencia de la presente acción constitucional, esta Juez constitucional deberá resolver los siguientes problemas jurídicos.

1. ¿Vulnera la **EPS ASMETSALUD S.A.S** el derecho fundamental a la salud del accionante al no haber autorizado ni entregado el medicamento denominado **"BUPROPION TABLETA DE 300 MG"**?

2. ¿Se dan los presupuestos jurisprudenciales para exonerar al accionante del pago de copagos y cuotas moderadoras en lo que tiene que ver con la entrega del medicamento requerido y señalado con anterioridad?

3. Por otro lado, ¿Es viable conceder el tratamiento integral y los viáticos al accionante a fin de contrarrestar la patología que lo aqueja?

Para resolver los problemas jurídicos planteados resulta necesario abordar los siguientes temas:

- El derecho a la integralidad y continuidad en la atención en salud del accionante.
- Naturaleza jurídica de los copagos, las cuotas moderadoras y causales de exoneración.
- Estudio del caso concreto.

3.4 DEL DERECHO A LA INTEGRALIDAD Y CONTINUIDAD EN LA ATENCIÓN EN SALUD DEL ACCIONANTE.

Sobre este punto, de acuerdo con el artículo 2 literal D de la Ley 100 de 1993 la integralidad en el marco de la Seguridad Social debe entenderse como *"la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda la población. Para este efecto cada quien contribuirá según su capacidad y recibirá lo necesario para atender sus contingencias amparadas por esta Ley"*; criterio que fue reiterado por la Ley 1122 de 2007 y actualmente desarrollado por el artículo 8 de la Ley Estatutaria de salud.

Así, la H. Corte Constitucional en Sentencia T – 259 de 2019 precisó la figura del tratamiento integral en materia de salud, indicando:

"El tratamiento integral tiene la finalidad de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud y evitar la interposición de acciones de tutela por cada servicio prescrito por el médico tratante del accionante "Las EPS no pueden omitir la prestación de los servicios de salud que supongan la interrupción de los tratamientos por conflictos contractuales o administrativos, e impidan el acceso de sus afiliados a la finalización óptima de los tratamientos". En esa medida, el objetivo final del tratamiento

integral consiste en "asegurar la atención (...) de las prestaciones relacionadas con las afecciones de los pacientes"

Por lo general, se ordena cuando (i) la entidad encargada de la prestación del servicio ha sido negligente en el ejercicio de sus funciones y ello ponga en riesgo los derechos fundamentales del paciente. Igualmente, se reconoce cuando (ii) el usuario es un sujeto de especial protección constitucional (como sucede con los menores de edad, adultos mayores, indígenas, desplazados, personas con discapacidad física o que padezcan enfermedades catastróficas); o con aquellas (iii) personas que "exhiben condiciones de salud extremadamente precarias e indignas".

El juez constitucional en estos casos debe precisar el diagnóstico que el médico tratante estableció respecto al accionante y frente al cual recae la orden del tratamiento integral. Lo dicho teniendo en consideración que no resulta posible dictar órdenes indeterminadas ni reconocer prestaciones futuras e inciertas; lo contrario implicaría presumir la mala fe de la EPS en relación con el cumplimiento de sus deberes y las obligaciones con sus afiliados, en contradicción del artículo 83 Superior.

De ahí que una vez otorgado el tratamiento integral, las EPSs accionadas estén en la obligación de atender no solo los servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, sino también los no incluido que le sean prescritos a los accionantes con ocasión de sus diagnósticos; ello por cuanto en la evolución de sus padecimientos puede llegar a requerirlos en el ámbito de la atención integral a que tiene derecho; lo contrario impondría a la impetrante la necesidad de estar acudiendo de una entidad a otra y de proponer una serie indeterminada de acciones de tutela cada que requiera una nueva medicación, una cita especializada, un tratamiento diferente o adicional, etc.; así mismo, se atosigaría a la administración de justicia con acciones que, de prodigarse en la orden tuitiva y prestarse una verdadera atención integral a los padecimientos generadores de la protección, no se harían necesarias.

3.5 NATURALEZA JURÍDICA DE LOS COPAGOS, LAS CUOTAS MODERADORAS Y CAUSALES DE EXONERACIÓN.

El artículo 187 de la Ley 100 de 1993, por medio de la cual se regula el Sistema de Seguridad Social Integral, establece la existencia de *pagos moderadores*, los cuales tienen por objeto racionalizar y sostener el uso del sistema de salud. Esta misma norma aclara que dichos pagos deberán estipularse de conformidad con la situación socioeconómica de los usuarios del Sistema, pues bajo ninguna circunstancia pueden convertirse en barreras de acceso al servicio de salud.

La H. Corte Constitucional se pronunció en la sentencia T-402 de 2018, *precisó que:*

"La exequibilidad del cobro de las cuotas moderadoras tendrá que sujetarse a la condición de que con éste nunca se impida a las personas el acceso a los servicios de salud; de tal forma que, si el usuario del servicio -afiliado cotizante o sus beneficiarios- al momento de requerirlo no dispone de los recursos económicos para cancelarlas o controvierte la validez de su exigencia, el Sistema y sus funcionarios no le pueden negar la prestación íntegra y adecuada". De modo que, cuando una persona no tiene los recursos económicos para cancelar el monto de los pagos o cuotas moderadoras, la exigencia de las mismas limita su acceso a los servicios de salud, lo cual va en contravía de los principios que deben regir la prestación del servicio

Como desarrollo de lo establecido en la Ley 100 de 1993, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud expidió el Acuerdo 260 de 2004, en el que se definió el régimen de pagos compartidos y cuotas moderadoras dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El mencionado Acuerdo se encargó de establecer: (i) las clases de pagos moderadores, (ii) el objeto de su recaudo, (iii) la manera cómo estos se fijan y (iv) las excepciones a su pago.

En relación con las clases de pagos, dicho Acuerdo en su artículo 3º estableció la diferencia entre las cuotas moderadoras y los copagos.

Señaló que las primeras son aplicables a los afiliados cotizantes y a sus beneficiarios, mientras que los segundos se aplican única y exclusivamente a los afiliados beneficiarios.

Al respecto, esta Corporación ha reconocido que el establecimiento de las cuotas moderadoras, atiende el propósito de racionalizar el acceso al Sistema General de Seguridad Social en Salud por parte de los afiliados y sus beneficiarios, evitando desgastes innecesarios en la prestación del servicio, y, de otro lado, con los copagos aplicables a los beneficiarios, pretende que una vez se haya ordenado la práctica de algún servicio médico, se realice una contribución, de conformidad con un porcentaje establecido por la autoridad competente y acorde a la capacidad económica del usuario, con la finalidad de generar financiación al Sistema y proteger su sostenibilidad".

Ahora bien, el precitado Acuerdo (entiéndase 260 de 2004), en su artículo 7º, hace referencia a las excepciones a la cancelación de copagos de la siguiente forma:

"ARTÍCULO 7º. Servicios sujetos al cobro de copagos. Deberán aplicarse copagos a todos los servicios contenidos en el plan obligatorio de salud, con excepción de:

- 1. Servicios de promoción y prevención.**
- 2. Programas de control en atención materno infantil.**
- 3. Programas de control en atención de las enfermedades transmisibles.**
- 4. Enfermedades catastróficas o de alto costo.**
- 5. La atención inicial de urgencias.**
- 6. Los servicios enunciados en el artículo precedente**

De otro lado, con el objetivo de evitar que el cobro de copagos se convierta en una barrera para la garantía del derecho a la salud, el Alto Tribunal Constitucional ha considerado que hay lugar a la exoneración del cobro de los *pagos moderadores*, en los casos en los cuales se acredite la afectación o amenaza de algún derecho fundamental, a causa de que el afectado no cuente con los recursos para sufragar los citados costos. De ahí que el operador judicial deba tener en cuenta para eximir del cobro de estas cuotas:

"(i) cuando la persona que necesita con urgencia un servicio médico carece de la capacidad económica para asumir el valor de la cuota moderadora, la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio de salud deberá asegurar el acceso del paciente a éste, asumiendo el 100% del valor; (ii) cuando una persona requiere un servicio médico y tiene la capacidad económica para asumirlo, pero tiene problemas para hacer la erogación correspondiente de forma oportuna, la entidad encargada de la prestación deberá brindar oportunidades y formas de financiamiento de la cuota moderadora, con la posibilidad de exigir garantías, a fin de evitar que la falta de disponibilidad inmediata de recursos se convierta en un obstáculo para acceder a la prestación del servicio y (iii) una persona haya sido diagnosticada con una enfermedad de alto costo o esté sometida a las prescripciones regulares de un programa especial de atención integral para patologías específicas, casos en los cuales se encuentra legalmente eximida del cubrimiento de la erogación económica.

3.6 ESTUDIO DEL CASO CONCRETO: EL SEÑOR BERNARDO GARCÍA YATE TIENE DERECHO A UN TRATAMIENTO INTEGRAL OPORTUNO.

El señor **BERNARDO GARCÍA YATE**, promovió acción de tutela en contra de la **EPS SASMETSALUD S.A.S.**, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la dignidad

humana, a la salud y a la seguridad social, toda vez que a la fecha no se le ha autorizado la entrega del medicamento denominado **"BUPROPION TABLETA DE 300 MG"**, además del cobro de copagos o cuotas moderadoras al momento de reclamar el medicamento.

A partir de las pruebas allegadas, esta Sentenciadora pudo constatar las siguientes situaciones:

- El actor cuenta con 43 años de edad y se encuentra afiliado al régimen subsidiado de salud.
- Presenta como diagnóstico principal **"TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, NO ESPECIFICADO"** (Fl. 8 vto).
- De ahí que en consulta el pasado 18 de junio de la anualidad, su galena tratante le hubiese prescrito, entre otros, el medicamento objeto de la presente acción constitucional (Fl. 9 vto).
- A la fecha se encuentra desempleado, dependiente únicamente del sustento de sus padres (Fl. 18).

En consideración de lo expuesto, es claro que la patología que padece el accionante supone una atención médica continua y oportuna, que contenga todos los servicios médicos necesarios para contrarrestar la patología psiquiátrica que lo aqueja.

Todo lo anterior permite a esta sentenciadora inferir que la atención brindada por la **EPS ASMETSALUD** no ha sido del todo oportuna e integral, por el contrario, ha sido demorada en la autorización y entrega del medicamento **"BUPROPION TABLETA DE 300 MG"**, pues pese que aquel fue prescrito desde el pasado 18 de junio de 2019, a la fecha no ha sido suministrado por la accionada.

Esta situación, conjugada al prontuario de la demoras de las EPS en la prestación del servicio de salud, y en aras de salvaguardar la vida, y contrarrestar la patología que aqueja al accionante, exige a esta Juez Constitucional velar por la efectiva prestación del servicio requerido y en consecuencia se **ORDENARÁ** a la **EPS ASMETSALUD** que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes contadas a partir de la notificación del presente fallo, **AUTORICE**, de ser necesario, **Y HAGA ENTREGA EFECTIVA** del medicamento denominado **"BUPROPION TABLETA DE 300 MG"**, en cantidades de 90 tabletas al mes.

Y dado que la fórmula del medicamento fue prescrita por tres (03) meses, la entrega y aplicación del medicamento será de forma mensual (90 tabletas al mes) los cinco primeros días de cada mes; lo anterior teniendo en cuenta que la orden debe materializarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.

Ahora bien, este Despacho Judicial se acoge a la tesis enmarcada por la H. Corte Constitucional, que indica que el cobro de **CUOTAS**

MODERADORAS Y COPAGOS no puede acarrear barreras que impidan el acceso al servicio de la salud por parte de los usuarios, si sobresalen hechos notorios como, incapacidad económica.

Así las cosas, esta Sentenciadora encuentra entonces desproporcionado exigir el pago de una cuota moderadora y de copago para la entrega del medicamento requerido, a una persona que: (i) está afiliado al régimen subsidiado de salud, (ii) a la fecha no se encuentra laborando, (iii) depende económicamente de sus padres, (iv) y reside en un inmueble arrendado.

Y dado que la accionada no presentó contestación al presente trámite constitucional y no desvirtuó la manifestado por el accionante, se aplicará la presunción de veracidad consagrada en el artículo 20 del decreto 2195 de 1991 que establece que *"si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa"*.

Así, se **ORDENARÁ** a la **EPS ASMETSALUD**, que se abstenga de que se abstenga de cobrar cuotas moderadoras y copagos únicamente para la entrega del medicamento **"BUPROPION TABLETA DE 300 MG"**.

Sin embargo, no se accederá a la exoneración de copagos o cuotas moderadoras para todo lo que devengue el diagnóstico de **"TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, NO ESPECIFICADO"** por cuanto no existe evidencia de que se hayan prescrito otros procedimientos médicos por los cuales se estén cobrando al usuario copagos o cuotas moderadoras y, en tanto, no existe prueba de la periodicidad ni el monto que debe cancelar cada que requiere asistir a una cita médica o reclamar un medicamento.

Tampoco se accederá a la solicitud de cubrimiento de gastos de transporte pues del estudio integral del caso concreto, no se desprende que el accionante tenga algún procedimiento pendiente en ciudad diferente a su lugar de residencia, ni que a raíz de sus padecimientos hubiera tenido que desplazarse fuera de esta ciudad.

Sin embargo, esta Sentenciadora considera que el tratamiento integral resulta procedente en el caso bajo estudio por cuanto:

(i) Por el diagnóstico del accionante, se encuentra en un tratamiento médico que requiere continuidad, lo cual exige garantizar la no interrupción del tratamiento y por ende no imponer barreras al acceso al servicio y

(ii) Por cuanto el actor se ha visto expuesto a barreras que impiden el goce efectivo de los servicios de salud. Es decir, no resulta eficaz

autorizar y cubrir los servicios contemplados en el Plan Básico de Salud (PBS) y, sin embargo, no ofrecer las garantías de acceso correspondiente, lo cual constituye una indirecta negación de los servicios, pues se itera, ha tenido que esperar por más de tres meses que sea autorizado el medicamento requerido.

De ahí que se garantice al señor **BERNARDO GARCÍA YATE** el tratamiento integral con ocasión al diagnóstico de **"TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, NO ESPECIFICADO"** lo anterior, se itera, por cuanto en la evolución de sus padecimientos puede llegar a requerirlos en el ámbito de la atención integral a que tiene derecho; lo contrario impondría al impetrante la necesidad de estar acudiendo de una entidad a otra; y de proponer una serie indeterminada de acciones de tutela cada que requiera una nueva medicación, una cita especializada, un tratamiento diferente o adicional, etc.; así mismo se atosigaría a la administración de justicia con acciones que, de prodigarse en la orden tuitiva y prestarse una verdadera atención integral a los padecimientos generadores de la protección, no se harían necesarias¹; lo anterior en consideración a que la atención brindada por la EPS accionada no ha sido oportuna, sino que por el contrario ha sido tardía.

Por lo anteriormente discurrecido, el **JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL de MANIZALES, CALDAS**, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución

4. FALLA:

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental a la salud del señor **BERNARDO GARCÍA YATE** identificado con cédula de ciudadanía No. 75.079.820, en contra de la **EPS ASMETSALUD S.A.S** y de la **DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS**.

SEGUNDO: ORDENAR a la **EPS ASMETSALUD** que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes contadas a partir de la notificación del presente fallo, **AUTORICE**, de ser necesario, **Y HAGA ENTREGA EFECTIVA** del medicamento denominado **"BUPROPION TABLETA DE 300 MG"**, en cantidades de 90 tabletas al mes.

Y dado que la fórmula del medicamento fue prescrita por tres (03) meses, la entrega y aplicación del medicamento será de forma mensual (90 tabletas al mes) los cinco primeros días de cada mes; lo anterior teniendo en cuenta que la primera entrega debe materializarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.

¹ Ver, entre otras, Sentencias T - 233 de 2011 y T - 576 de 2008.

TERCERO: ORDENAR a la EPS ASMETSALUD que se abstenga de que se abstenga de cobrar cuotas moderadoras y copagos únicamente para la entrega del medicamento **"BUPROPION TABLETA DE 300 MG"**, por lo dicho en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: NO ACCEDER al suministro de viáticos por lo dicho en la parte motiva.

QUINTO: ORDENAR a la EPS ASMETSALUD el suministro del TRATAMIENTO INTEGRAL al señor BERNARDO GARCÍA YATE el tratamiento integral con ocasión al diagnóstico de **"TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, NO ESPECIFICADO"**, entendiéndose por este, lo relacionado con consultas médicas, exámenes, procedimientos quirúrgicos, suministro de medicamentos, hospitalización y demás, de tal manera que se brinde al paciente una adecuada recuperación, conforme a las prescripciones que los médicos tratantes efectúen para tal fin.

SEXTO: NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito y eficaz, con la advertencia que podrá ser impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

SÉPTIMO: ENVIAR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

ALEXANDRA HERNÁNDEZ HURTADO
LA JUEZ